

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

**G/ADP/W/68**

**G/SCM/W/77**

17 de octubre de 1995

(95-3123)

**Comité de Prácticas Antidumping  
Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias**

Original: español

## RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADÁ<sup>1</sup> SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE MÉXICO<sup>2</sup>

Se ha recibido de la Misión Permanente de México la siguiente comunicación, de fecha 15 de septiembre de 1995.

## RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS HECHAS POR EL CANADÁ SOBRE LA LEGISLACIÓN MEXICANA CONTRA PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL

### Respuesta a la pregunta 1

Así es, ya que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Constitución y las leyes que emanen del Congreso de la Unión, así como los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

En México los tratados son de aplicación directa, es decir, no requieren de un acto legislativo posterior a su promulgación para su aplicación, incorporándose directamente al orden jurídico interno, por lo tanto el Acuerdo de Implementación del Artículo VI y el Acuerdo SSMC y Cuotas Compensatorias de 1994, al cumplir con los requisitos señalados en el párrafo anterior, ha pasado a formar parte de nuestra legislación en materia de prácticas desleales, teniendo la misma jerarquía que la Ley de Comercio Exterior, y sus disposiciones deben ser observadas por la autoridad mexicana.

Las contradicciones entre ambos ordenamientos son resueltas por la propia Ley de Comercio Exterior, la cual establece en su artículo 2 que sus disposiciones son de orden público y de aplicación en toda la República, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados de los que México sea parte, por lo tanto, si existiera cualquier discrepancia entre los Acuerdos del GATT de 1994 y la Ley de Comercio Exterior o ésta última fuera omisa prevalecerían las disposiciones de los Acuerdos. El Reglamento de la Ley de Comercio Exterior tiene un nivel jerárquico inferior a los Acuerdos del GATT de 1994, por lo que prevalecen las disposiciones de los Acuerdos sobre las del Reglamento.

---

<sup>1</sup>G/ADP/W/29 - G/SCM/W/36.

<sup>2</sup>G/ADP/N/1/MEX/1 y G/SCM/N/1/MEX/1.

Respuesta a la pregunta 2

Para el caso en que se emita una decisión por la OMC que de acuerdo a las propias disposiciones de los respectivos acuerdos deba ser acatada por México, la autoridad investigadora emitirá una resolución que incorpore la decisión de la OMC con el objeto de que surta sus efectos en México.

Respuesta a la pregunta 3

La única vía sería el Juicio de Amparo que se interpondría cuando la implementación de una orden del panel viole las garantías previstas en la constitución.

Representatividad

Respuesta a la pregunta 1

Conforme a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, los solicitantes están obligados a probar que representan cuando menos el 25 por ciento de la producción nacional. La autoridad investigadora verifica si en efecto el solicitante alcanza dicho porcentaje de la producción nacional, comparando su información con diversas fuentes estadísticas y finalmente notificará a los representantes del resto de la producción nacional con el fin de que manifiesten su interés u oposición al inicio de la investigación.

Respuesta a la pregunta 2

No. Cuando el solicitante es un miembro de una organización y es éste el que presenta la solicitud, se entiende que ha sido presentada en nombre propio; por el contrario, cuando la solicitud se presenta a nombre de una organización, entonces sí se entiende que cuenta con el apoyo [de la mayoría] de sus miembros.

Daño

Respuesta a la pregunta 1

No existe inconsistencia alguna entre lo ordenado por el artículo 29 de la Ley de Comercio Exterior y los Acuerdos Antidumping y Antisubvenciones de la OMC ya que cualquier país, con el hecho de suscribir y aceptar dichos Acuerdos está obligado a realizar el análisis de daño previo a la imposición de impuestos compensatorios a las importaciones de productos de México, otro Estado miembro, y con esto se cumple con la reciprocidad requerida por la Ley de Comercio Exterior. Esto es, a los países miembros de la OMC, México otorga la prueba de daño o amenaza de daño a dichos países.

Respuesta a la pregunta 2

No, la expresión "no significativas" y "no tienen algún efecto adverso identificable sobre la producción nacional" se refieren a "negligible".

Respuesta a la pregunta 3

El artículo 69 del Reglamento contempla la obligación de la autoridad investigadora, de examinar otros factores de que tenga conocimiento, distintos de las importaciones objeto de investigación, que al mismo tiempo afecten a la producción nacional, para determinar si el daño o amenaza de daño alegados

son causados directamente por dichas importaciones. Además, dicho artículo incluye los factores que podrán evaluarse, a saber:

- I. El volumen y los precios de las importaciones que no se realizan en condiciones de discriminación de precios o de subvención;
- II. La contracción de la demanda o variaciones en la estructura de consumo;
- III. Las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales, así como la competencia entre ellos; y
- IV. La evolución de la tecnología, la productividad y los resultados de la actividad exportadora.

#### Respuesta a la pregunta 4

Cualquier elemento que apoye el análisis de las variables económicas que aparecen en la ley, pudiendo ser por ejemplo, la situación de los mercados nacional, internacional y de exportación, ciclos económicos, factores de competitividad, desarrollo de nuevas tecnologías, etc.

#### Respuesta a la pregunta 5

La autoridad investigadora al llevar a cabo la determinación de la existencia de amenaza de daño tomará en cuenta todos los factores "descritos" (en el mismo artículo 42) que le permitan concluir si las nuevas importaciones en condiciones desleales serían inminentes y que, de no aplicarse cuotas compensatorias se produciría un daño. De lo anterior se desprende que sólo factores que indiquen la existencia de amenaza de daño son tomados en cuenta.

#### Plazos previstos en los procedimientos

##### Respuesta a la pregunta 1

La propia Ley de Comercio Exterior en su artículo 3º, establece que los plazos marcados en días deberán de entenderse como días hábiles, mientras que los plazos que establece el Acuerdo son días naturales, por lo tanto, ambos plazos son en realidad muy similares, y de hecho, el plazo que la legislación nacional prevé es más largo que el que los propios Acuerdos establecen, por lo que ambas legislaciones son perfectamente compatibles.

La resolución preliminar, conforme a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Comercio Exterior, deberá ser dictada dentro de un plazo de 130 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de inicio en el Diario Oficial de la Federación, pero no antes de 45 días hábiles, si se determina una cuota compensatoria provisional como lo prevé la fracción 1 de éste artículo. Este plazo es equivalente al de 60 días naturales previsto en el artículo 7.3 del Acuerdo AD y el 17.3 del Acuerdo SSMC por lo que no existe ninguna inconsistencia.

El artículo 59 del mismo ordenamiento legal señala que la resolución final deberá ser dictada dentro de un plazo de 260 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución de inicio de la investigación.

### Cláusulas de extinción

#### Respuesta a la pregunta 1

La declaratoria de eliminación solo podrá emitirse y publicarse previa notificación a las partes interesadas de que ha transcurrido el plazo de ley. La intención de este artículo no es la de advertir a las partes interesadas en la investigación que el término de cinco años para la eliminación de la cuota compensatoria se acerca, sino únicamente de notificarles que dicho período ha transcurrido y que se procederá a eliminar la cuota compensatoria impuesta.

#### Respuesta a la pregunta 2

El artículo 109 del Reglamento se refiere exclusivamente a la eliminación de las cuotas compensatorias, sin embargo, conforme a lo dispuesto por los artículos 11.5 del Acuerdo AD y 21.5 del Acuerdo SSMC, los compromisos de precios deberán sujetarse a estas disposiciones, ya que como se indicó en la respuesta a la pregunta 1, estas disposiciones deben ser observadas por la autoridad correspondiente.

### Medidas contra la elusión

#### Respuesta

Si bien no existe disposición relativa en los instrumentos que forman parte del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, tampoco existe disposición que contradiga o prohíba lo dispuesto en los artículos 71 de la Ley y 96 del Reglamento. Cabe aclarar que esta cuestión se encuentra pendiente de regularse dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, ya que de acuerdo con la Decisión sobre las medidas contra la elusión la misma se remitió, para su resolución, al Comité de Prácticas Antidumping. Por lo tanto, una vez que exista esta resolución, México la acatará como lo ha hecho con el resto de los preceptos de la Organización Mundial del Comercio.

### Definición de subvención

#### Respuesta a la pregunta 1

Como ha quedado anteriormente expresado, el Acuerdo SSMC forma parte de la legislación nacional y la definición de subsidio contenida en su artículo 1º, y el requisito de especificidad establecido en el artículo 2, deberán ser observados por la autoridad investigadora, por las razones expuestas en la respuesta a la pregunta 1.

#### Respuesta a la pregunta 2

Como se ha indicado, toda vez que el Acuerdo SSMC forma parte de la legislación nacional, la lista ilustrativa de subvenciones a la exportación contenida en el anexo I del propio acuerdo es la lista ilustrativa a que se refiere el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994.

Subvenciones no recurribles

Respuesta a la pregunta 1

Sí.

Respuesta a la pregunta 2

Sí.

Cálculo de la cuantía de una subvención

Respuesta a la pregunta 1

El método para calcular el beneficio conferido al receptor de un subsidio ya ha sido debidamente desarrollado por la autoridad investigadora y en la práctica administrativa ha sido utilizado en diversos procedimientos. Básicamente, el beneficio consiste en una transferencia de recursos en condiciones distintas a las condiciones de mercado. Por consiguiente, el beneficio se mide como la diferencia entre el precio de mercado y el precio efectivamente pagado multiplicada por la cantidad del bien subsidiado de que se trate (agua, electricidad, etc., en lo que respecta a subsidios a insumos). Véase, por ejemplo, las resoluciones preliminares sobre aceros planos publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 14, 17 y 18 de abril de 1995. Sin embargo, este método todavía no ha sido incorporado a la legislación nacional. Dentro de las modificaciones y adiciones que se están preparando a la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento se encuentra la inclusión de dicha metodología, la cual deberá ser perfectamente compatible con las disposiciones del Acuerdo SSMC.

Países en desarrollo Miembros

Respuesta

En una investigación sobre subvenciones la autoridad mexicana tomará en cuenta lo dispuesto por el artículo 27 del Acuerdo SSMC y respetará las exenciones y privilegios en él concedidos a los países en desarrollo Miembros y a los países menos adelantados Miembros.

Importaciones masivas de productos subvencionados

Respuesta

Antes de responder a esta pregunta, es necesario aclarar que el artículo 93, fracción V de la Ley de Comercio Exterior prevé los supuestos establecidos en el artículo 20.6 del Acuerdo SSMC.

Al no haber una distinción expresa, en México la legislación considera lo mismo a las cuotas compensatorias y a las cuotas antidumping, por lo que en el supuesto planteado se aplica lo dispuesto por la fracción V, del artículo 93 de la Ley de Comercio Exterior.

Cuestiones específicas relativas al anexo I: la Ley de Comercio Exterior

Respuesta a la pregunta 1

En efecto, al mencionar gastos generales el artículo 31, fracción II de la Ley de Comercio Exterior se refiere a los gastos generales de administración y ventas y a todos los demás gastos de

tipo corporativo. Esto es claro en el artículo 46, fracción II del Reglamento, el cual indica explícitamente que los gastos generales son los de administración y ventas, los financieros y demás gastos no distribuibles de manera directa, incluyendo los concernientes a la investigación y desarrollo y la depreciación de activos no destinados a la producción.

Respuesta a la pregunta 2

El resultado de una audiencia conciliatoria puede ser la consecución de fórmulas amigables de solución y conclusión de la investigación, las cuales de resultar procedentes serán incorporadas a la resolución respectiva que tendrá el carácter de resolución final. Las audiencias conciliatorias no están previstas en los Acuerdos del GATT, sin embargo su celebración no viola en forma alguna dichos acuerdos. Además, las audiencias conciliatorias representan un mecanismo muy importante para que las partes interesadas en la investigación puedan llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio que evite diferencias posteriores. Es prudente mencionar que el artículo 5 del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias contempla lo relativo a los buenos oficios, la conciliación y la mediación. Por lo tanto son mecanismos previstos y recomendados por los Acuerdos del GATT para solucionar diferencias.

Respuesta a la pregunta 3

Si bien el artículo 62 de la Ley de Comercio Exterior contiene un lenguaje distinto al de los Acuerdos del GATT, el artículo 90 del Reglamento sí utiliza el mismo lenguaje. Por lo que en realidad no existe la inconsistencia alegada. Sin embargo, en caso de existir una discrepancia entre el texto del artículo 62 de la Ley de Comercio Exterior y el texto de los artículos 9.1 del Acuerdo AD y 19.2 del Acuerdo SSMC, por las razones que se han expuesto repetidamente, prevalecen los Acuerdos del GATT.

Respuesta a la pregunta 4

Un importador solamente debe acreditar conforme al procedimiento de reglas de origen establecido en la legislación mexicana que el país de origen es distinto al país cuyas mercancías están sujetas al pago de cuotas compensatorias.

Respuesta a la pregunta 5

Debido a la prohibición expresa, por parte del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC para aceptar compromisos de exportadores que restrinjan sus exportaciones a México, la Secretaría dejará de aplicar las partes correspondientes del artículo 72 de la Ley de Comercio Exterior, con el fin de hacer compatible su actuación con lo Acuerdos de la OMC.

Respuesta a la pregunta 6

La parte conducente del texto del artículo 6 de la Ley de Comercio Exterior a que se refiere el artículo 73 de la misma es la siguiente "... Esta Comisión estará encargada de emitir opinión en los asuntos de comercio exterior de conformidad a lo establecido en la presente Ley ..."

Respuesta a la pregunta 7

De conformidad con los artículos 149 y 150 del Reglamento, por información confidencial debemos entender cualquier información específica de la empresa de que se trate cuya revelación o difusión al público pueda causar daño a su posición competitiva, dentro de la cual podemos listar, los procesos y costos de producción, términos y condiciones de venta, costos de distribución, identidad

de componentes y los demás listados en el propio artículo 149. Por información comercial reservada, debemos entender, en los términos del artículo 150 del Reglamento, aquella de cuya divulgación pueda resultar un daño patrimonial o financiero sustancial e irreversible para el propietario de dicha información y que puede incluir entre otros conceptos, fórmulas secretas o procesos que tengan un valor comercial, no patentado y de conocimiento exclusivo de un reducido grupo de personas que lo utilizan en la producción de un artículo de comercio.

Ahora bien, si una empresa autoriza la divulgación a las demás partes interesadas de información que aportó en el curso en una investigación, que haya sido marcada como confidencial o comercial reservada, la autoridad otorgará dicho acceso.

#### Respuesta a la pregunta 8

La Ley de Comercio Exterior y el Reglamento no contemplan límite tiempo para el desahogo de las audiencias públicas. En la práctica la Secretaría, en una reunión previa con los representantes de las partes interesadas, acuerdan los tiempos máximos para la exposición oral de cada una de ellas.

#### Respuesta a la pregunta 9

El ofrecimiento de la confesión de las autoridades como prueba, está prohibida. Esta prohibición tiene su base en los principios jurídicos que aplican en el Derecho Mexicano, debido a que la prueba confesional se refiere a hechos propios (de una persona en particular) y la autoridad es un ente impersonal. Sin embargo, esta prohibición no impide que la autoridad investigadora, en caso necesario, rinda sus informes por escrito.

#### Respuesta a la pregunta 10

En caso de que la autoridad investigadora decida practicar, repetir o ampliar una diligencia probatoria, así lo notificará a las partes con interés en el desarrollo de la misma, con el objeto de otorgar una equidad procesal, sin embargo solamente que así lo requiriera el desahogo de alguna diligencia, la autoridad no tiene la obligación de notificarlo a todas las partes.

Ejemplos de estas diligencias pueden ser visitas de inspección ocular a la planta productiva de los solicitantes o requerimientos de información adicional a cualquiera de las partes.

#### Respuesta a la pregunta 11

Sí.

#### Respuesta a la pregunta 12

En virtud de que el Código Fiscal de la Federación tiene aplicación supletoria, todo lo relacionado con el procedimiento administrativo, que no se encuentre regulado de manera específica en la Ley de Comercio Exterior o en su Reglamento, se regulará de conformidad con dicho Código, a excepción de las notificaciones y las visitas de verificación, tal como lo señala el artículo 85 de la Ley. Independientemente de la supletoriedad del Código, es claro que dicha suplencia se refiere únicamente a aquellas cuestiones procedimentales omisas, siempre y cuando no se afecte el sentido de la norma sustantiva.

Adjunto a las presentes respuestas se envían las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, relativas a los procedimientos administrativos que se aplican supletoriamente.

En la práctica, la aplicación supletoria debe valorarse en el caso concreto, por lo que enumerar porciones del Código Fiscal resultaría limitativo.

Respuesta a la pregunta 13

La autoridad investigadora, al hacer su análisis verifica los efectos que pueden causar daño a otros procesos productivos, así como a los consumidores; dicho análisis se realiza a través de la valoración de los efectos de las cuotas compensatorias y de otros factores bajo ciertas condiciones del mercado.

Lo anterior puede significar, como lo estipula el artículo 90 del Reglamento que la cuota compensatoria podrá fijarse por debajo de los márgenes de discriminación de precios y del monto de las subvenciones, siempre que sea suficiente para eliminar el daño o amenaza de daño causado.

Respuesta a la pregunta 14

Sí.

Respuesta a la pregunta 15

Las multas a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 93 de la Ley de Comercio Exterior, se aplican tanto a nacionales como a extranjeros, incluyendo a los gobiernos de otros Miembros. Sin embargo, toda vez ni el GATT de 1994 ni sus Acuerdos son omisos en cuanto a la determinación de ilícitos y sus respectivas sanciones, dejando a la voluntad soberana de los Miembros la penalización de aquellas conductas que de acuerdo con la legislación nacional sean constitutivas de ilícitos (v.g.: violación a compromisos de confidencialidad).

Respuesta a la pregunta 16

La diferencia que existe entre lo dispuesto por el Código AD y el Código de Subsidios con la Ley de Comercio Exterior, es que esta última, define el cómputo del monto de la multa en meses y, los códigos aludidos, lo definen en días naturales, sin embargo, la intención es la misma, ya que tres meses equivalen aproximadamente a 90 días.

Sin embargo, en virtud de la diferencia que existe entre los dos cómputos, la autoridad investigadora estará a lo dispuesto por los Códigos del GATT, tratándose de países Miembros, con base en lo señalado en la respuesta 1.

Respuesta a la pregunta 17

En caso de que los extranjeros cometan delitos penales o infracciones civiles que encuadren en las infracciones a las que se refiere el artículo 93, independientemente de lo que señalen los acuerdos y tratados internacionales aplicables, serán acreedores a las sanciones establecidas por la legislación en la materia.

Algunos ejemplos de delitos penales en que pueden incurrir, de acuerdo a lo señalado por el artículo 93 de la Ley de Comercio Exterior son, entre otros: falsificación de documentos en general (artículos 243-245, Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para los demás Estados en materia federal); daños y perjuicios (artículos 2080, 2104, 2106, 2107 y demás relativos del Código Civil para el Distrito Federal).



Respuesta a la pregunta 18

La relación que existe entre la Secretaría de Comercio y Fomento industrial (la Secretaría) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de cuotas compensatorias, consiste en que la Secretaría de Comercio es la que determina el monto de las cuotas compensatorias, tanto definitivas como provisionales, a través de las resoluciones correspondientes, mientras que la Secretaría de Hacienda es la que hace efectivo el cobro de las mismas, así como realiza los actos de aplicación de dichas cuotas.

Por lo tanto pueden impugnarse las resoluciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que establecen las cuotas compensatorias o las determinaciones de la Secretaría de Hacienda, relativas al cobro de las cuotas.

Respuesta a la pregunta 19

El artículo 239 bis del Código Fiscal de la Federación, a la letra dice:

"La Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, de oficio o a petición fundada de la Sala Regional correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá resolver los juicios que por sus características especiales así lo ameriten. Revisten estas características los juicios en que:

- i) El valor del negocio exceda de cien veces el salario mínimo general vigente para el área geográfica del Distrito Federal, elevado al año.
- ii) Para su resolución sea necesario establecer, por primera vez, la interpretación directa de una ley o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución.

Si la Sala Superior decide ejercer de oficio la facultad a que este artículo se refiere, lo comunicará a la Sala Regional antes de que ésta admita la contestación de la demanda.

La petición de la citada Secretaría podrá presentarse antes de que se acuerde dicha admisión, en escrito dirigido a la Sala Superior, por conducto de la Sala Regional respectiva, y acompañado de las constancias necesarias.

Cuando la Sala Regional proponga que un asunto sea resuelto por la Sala Superior, acordará enviar a ésta la petición, en el auto que admita la contestación de la demanda.

Los acuerdos de la Sala Superior que admitan la petición o que de oficio decidan resolver el juicio, serán notificados personalmente a las partes por la Sala Regional. Al efectuar la notificación, se les requerirá que señalen domicilio para recibir notificaciones en la sede de la Sala Superior, así como que designen persona autorizada para recibirlas o, en el caso de las autoridades, que señalen a su representante dicha sede, apercibiéndolas a las propias partes que de no hacerlo, la resolución que dicte la Sala Superior les será notificada por lista.

Una vez cerrada la instrucción del juicio, la Sala Regional remitirá el expediente original a la Sala Superior. Recibido éste, el Presidente de la Sala Superior designará magistrado ponente."

El término (deadline) a que se refiere el último párrafo del artículo 95 de la Ley de Comercio Exterior, se determina en el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, el cual estipula que el escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió (Secretaría de

Comercio y Fomento Industrial) o ejecutó (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) el acto impugnado, dentro de los 45 días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación.

Cuestiones específicas en relación con el anexo II: Reglamento de la Ley de Comercio Exterior

Respuesta a la pregunta 1

La traducción es completamente errónea. La disposición aludida decir en inglés "due to situations which are transitory or circumstantial in nature". En esta regla se reconoce que, a corto plazo, las ventas a pérdida puedan ser perfectamente normales. Por ejemplo, cuando ocurren "shocks" a la oferta debido a fenómenos naturales, tales como heladas o sequías, los costos de producción por unidad se disparan. Es obvio que las ventas que se dan en este contexto son necesariamente a pérdida, puesto que los productores no están en condiciones de fijar precios suficientemente altos como para absorber tales costos, ya que si lo hicieran se quedarían fuera de mercado. En este caso, los costos podrían calcularse sobre un período más extenso que el investigado, lo cual les daría una mayor representatividad para efectos de su comparación contra los precios de venta. Esta regla es análoga a la que se contempla en la última frase del artículo 2.2.1 del Acuerdo AD.

Respuesta a la pregunta 2

Los materiales y componentes indirectos son los insumos que no se pueden asignar por línea de producción (V.gr., las estopas, los aceites y los lubricantes). Otro ejemplo son las herramientas que no forman parte de los activos fijos.

Respuesta a la pregunta 3

El Reglamento es compatible con el artículo 2.2.1.1 del Código AD, como se explica a continuación. Los costos de producción que se usan en la prueba de ventas a pérdida y en la integración del valor reconstruido son los mismos. De acuerdo con el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 46 del Reglamento, estos costos deben calcularse sobre la base de la información relativa a todas las plantas de un exportador, lo que excluye la información específicamente aplicable a la planta o plantas que fabrican el producto exportado. Esto es porque la prueba de ventas a pérdida concierne la comparación de los costos internos contra los precios internos, mientras que el valor reconstruido implica la reconstrucción de los precios internos por la vía de acumular los costos internos. Por consiguiente, ni una ni otra deben establecerse sobre la base de los costos particulares a los productos exportados. Esta regla no contraviene ninguna disposición en el Acuerdo AD.

Respuesta a la pregunta 4

El valor reconstruido se refiere a los productos vendidos internamente y no a los exportados (se reconstruye el precio interno, no el de exportación). Por ello, los costos de empaque para exportación son irrelevantes para efectos de integrar el valor reconstruido. Ahora bien, si se tratara de los costos de empaque para las ventas internas, estos costos se tomarían como parte del costo de producción. Esto está explícitamente previsto en el último párrafo de la fracción I del artículo 46 del Reglamento.

Respuesta a la pregunta 5

La fracción II del artículo 46 del Reglamento es clara en cuanto a que la depreciación de activos no destinados a la producción forma parte de los gastos generales, más no del "overhead". Por otro lado, la depreciación de activos no destinados a la producción (edificios corporativos, por ejemplo)

representa un gasto para la empresa y por lo mismo tiene que tomarse en cuenta para efectos de calcular el costo total. Dado que se trata de un gasto corporativo, se considera como un gasto general.

El término "activos fuera de uso" se explica por sí mismo. Un ejemplo de un activo productivo "fuera de uso" puede ser un barco pesquero varado en el puerto en razón a que, durante el período investigado, los cardúmenes no fueron suficientemente grandes como para requerir el que toda la flota se pusiera en operación.

#### Respuesta a la pregunta 6

No existe conflicto alguno. El punto 2.2.1.1 indica que los costos deben calcularse normalmente sobre la base de los registros que lleve el exportador objeto de investigación. Por definición, los comercializadores no tienen un costo de producción sino un costo de adquisición (el costo al que le compran mercancías a la empresa fabricante). Los comercializadores guardan registros de sus costos de adquisición. Por ello, no están imposibilitados para proveer a la Secretaría esta información.

#### Respuesta a la pregunta 7

La traducción es errónea. El texto alude al costo total que la Secretaría haya determinado para las empresas que son proveedoras de las firmas comercializadoras.

#### Respuesta a la pregunta 8

Los dos artículos citados no guardan relación alguna entre sí, por lo que sus disposiciones no se prestan a una comparación. El artículo 54 del Reglamento se refiere a los ajustes por diferencias en condiciones de venta. El punto aquí es que los gastos generales son atribuibles a todas las ventas y por lo mismo no pueden ser materia de ajuste (todas las ventas estarían en la misma condición). Por su parte, el artículo 56 del Reglamento norma el procedimiento para efectuar ajustes por diferencias físicas. Ambos artículos son de carácter obligatorio.

#### Respuesta a la pregunta 9

El artículo 55 corresponde al ajuste por cantidades. El texto se explica por sí mismo. Sin embargo, para ayudar a su comprensión, se proporciona la siguiente explicación. La fracción I de dicho artículo establece que cuando existe un esquema de precios diferenciados sobre la base del volumen de compra, el margen de discriminación de precios debe establecerse por estrato (por categorías de volumen); por ejemplo, valores normales de alto volumen comparados a precios de exportación de alto volumen. La fracción II del mismo artículo indica que, en los casos en que algunas ventas internas no son por volúmenes similares a los de exportación, los precios de estas ventas deben ajustarse a los precios internos que resulten comparables en términos de volumen a las ventas externas. Por ejemplo, si no existen ventas de exportación de bajo volumen, los precios de las ventas internas de bajo volumen deben ajustarse a los precios de las ventas internas de alto volumen (suponiendo que, en efecto, todas las ventas de exportación son a este nivel).

La fracción III del artículo antes citado establece ciertas reglas de control. El inciso A) concierne a mercados ficticios. El inciso B) requiere que el esquema de precios diferenciados por volumen se aplique en forma consistente; es decir, se tiene que mostrar que los precios de las ventas de alto volumen siempre son más bajos que los precios de las ventas de bajo volumen. Se anexa copia de la resolución final referente a la investigación antidumping sobre papel bond. Este caso ilustra *in extenso* la aplicación de las diversas disposiciones que contiene el artículo 55 del Reglamento. Finalmente, el término "model

of prices" no forma parte del texto del artículo antes citado y, de nueva cuenta, proviene de una mala traducción.

Respuesta a la pregunta 10

Estos dos conceptos no significan lo mismo. El último párrafo del artículo 55 indica que cuando los métodos de ajuste previstos en los incisos I y II no sean practicables, el ajuste por cantidades puede efectuarse mediante cualquier otro método sobre la base de la información que exista en expedientes; en este caso, los datos aportados por el exportador de que se trate. El concepto de "mejor información disponible" que refiere el artículo 6.8 del Acuerdo AD tiene el sentido opuesto; es decir, se refiere a información ajena al exportador investigado.

Respuesta a la pregunta 11

Los casos de valor reconstruido requieren el cálculo de costos. En los países con alta inflación, los costos expresados en precios corrientes se distorsionan. Este efecto puede neutralizarse mediante ajustes. La disposición en el Acuerdo que permite llevar a cabo este tipo de ajustes es el artículo 2.4 el cual establece que: "... se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios ...".

Respuesta a la pregunta 12

En ambos casos se refiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Sin embargo es necesario precisar que existe una unidad administrativa dentro de la Secretaría, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, que de acuerdo a la legislación aplicable tiene a su cargo el trámite de la investigación de conformidad con lo previsto en el artículo 75 fracción I.

Por otro lado, cuando el artículo 80 fracción I, se refiere a "la autoridad que emite el acto", se refiere a la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por lo que no existe la supuesta multiplicidad de autoridades administrativas competentes.

Respuesta a la pregunta 13

Los "fundamentos legales en los que se sustenta la solicitud" son todos los preceptos o artículos de la legislación aplicable en la materia a los que debe hacer referencia cualquier solicitante para respaldar sus aseveraciones y argumentos. (i.e. pursuant to Section ... of the Trade Act ... .)

La "descripción de peticiones de otras medidas de regulación o restricción comercial relacionadas con la mercancía objeto de la solicitud", significa una explicación sobre las solicitudes hechas a las autoridades que correspondan para el establecimiento de otras medidas de regulación o restricción, por ejemplo, una solicitud de salvaguarda.

Respuesta a la pregunta 14

La convocatoria estipulada en la fracción I del artículo 81, se refiere a una notificación de carácter oficial, contenida en la publicación que se hace de la resolución de inicio. Dicho aviso, tiene como objetivo el que aquellos que se consideren interesados puedan intervenir en la investigación a fin de manifestar lo que consideren pertinente. Cuando una persona interesada no comparece en respuesta a dicha convocatoria, no participa en la investigación y por lo tanto, la autoridad actúa con la mejor información disponible.

Respuesta a la pregunta 15

Efectivamente, tanto el artículo 82, fracción I, inciso F, como el 83, fracción I, inciso F se refieren a la denominada "lesser duty rule". Dichos artículos están sustentados por el artículo 62 de la Ley, y el 90 del Reglamento, mismos que explican que la cuota compensatoria podrá fijarse por debajo de los márgenes de discriminación de precios y del monto de las subvenciones, siempre que sea suficiente para eliminar el daño o amenaza de daño.

Respuesta a la pregunta 16

En términos del artículo 89 del Reglamento, las cuotas compensatorias, para aquellos exportadores que teniendo la oportunidad de participar, no lo hicieron, se fijan conforme al margen de discriminación de precios más alto de que tenga conocimiento la autoridad investigadora.

Respuesta a la pregunta 17

El artículo 93 del Reglamento no requiere la publicación de la petición hecha por las partes interesadas, sino únicamente señala, en su último párrafo que deberá publicarse la respuesta a dicha solicitud.

Respuesta a la pregunta 18

Debido a que los compromisos de precios son medidas que se equiparan con la imposición de cuotas antidumping y compensatorias, y que de acuerdo con el propio artículo 112 que establece, tienen por objeto eliminar el efecto dañino del dumping o la subvención, deben de cumplir con los principios que se establecen en los artículos 18.1 y 8.1 del Acuerdo AD y del de Subsidios, respectivamente.

Respuesta a la pregunta 19

Para los efectos de la Ley y su Reglamento, dentro del concepto de organizaciones legalmente constituidas, no se encuentran incluidos los sindicatos.